Rionegro Antioquia, 7 de febrero de 2023

Señoras(es):

JUZGADO DEL CIRCUITO DE RIONEGRO (REPARTO).

E. S. D.

Referencia	ACCIÓN DE TUTELA. SOLICITUD PROTECCIÓN A DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A ACCEDER A CARGOS PUBLICOS. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO. DERECHO DE PETICIÓN.
Accionante:	ALLISON SAMANTHA BLANCO LLANOS – [REDACTED]
Accionados:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD LIBRE.

Yo, Allison Samantha Blanco Llanos, identificada con la cédula de ciudadanía [REDACTED] de la ciudad de Bogotá, obrando en causa propia en calidad de concursante del Proceso de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Universidad Libre, acudo ante su despacho muy respetuosamente para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se conceda la protección inmediata a mis derechos fundamentales al Trabajo, Debido Proceso Administrativo y a Acceder a Cargos Públicos, que están siendo vulnerados por parte de la CNSC y la Universidad Libre, al excluirme del Proceso de Selección referido, con el estado de **“NO ADMITIDO”** surtidos los resultados de la prueba escrita y la respuesta a la respectiva reclamación realizada:

I. HECHOS.

Primero. Soy concursante del Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, para la OPEC No 184033, cargo Directivo Docente Coordinador para la Secretaría de Educación de Rionegro (Antioquia), convocatoria regida bajo el Acuerdo No. 153 de 2022.

Segundo. En el proceso de selección, de acuerdo con las etapas establecidas por la CNSC y la Universidad Libre, presenté la prueba escrita de conocimientos específicos y pedagógicos, y pruebas psicotécnicas para Directivo Docente Coordinador el día 25 de septiembre de 2022. El día 3 de noviembre de 2022 fueron publicados los resultados de esta prueba escrita, cuyo resultado en mi caso fue **69.15**, en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, puntaje que me otorgó el estatus de **“No continua en concurso”**, ya que el puntaje mínimo

aprobatorio para esta vacante es de 70 puntos. Para la prueba psicotécnica, mi resultado fue 73.21.

Tercero. Solicité, de acuerdo con las fechas y medios establecidos por la CNSC y la Universidad Libre, acceso al material de las pruebas realizadas el día 25 de septiembre de 2022, para posteriormente interponer reclamación ante estas entidades por el resultado obtenido en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos. Tuve acceso a este material, de acuerdo con citación de la CNSC y la Universidad Libre, el día 27 de noviembre de 2022.

Cuarto. De acuerdo con la revisión del material de las pruebas que realicé, evidenció que de las 110 preguntas que se realizaron en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, tuve 81 aciertos (76 aciertos más 5 preguntas imputadas que fueron concedidos como aciertos a todos los aspirantes a la OPEC). Igualmente, al releer algunos de los ítems, pude constatar que la respuesta que es dada como correcta, no tiene un sustento dentro de la legislación educativa que rige al país, y que, por ende, rige la función de los cargos docentes y directivos docentes, que son objetos de la convocatoria citada.

Quinto. Por considerar que los resultados obtenidos no correspondían a lo que la legislación educativa demanda como perfiles y funciones del cargo de Directivo Docente Coordinador, cargo al cual aspiré, presenté a través del sistema SIMO, el día 8 de noviembre de 2022, reclamación a estos resultados, solicitando me fuera aclarado también, cual fue el sistema de calificación de la prueba. En esta reclamación, solicité con argumentos con base en la ley, fueran revisadas las preguntas No. 6, 23, 48, 49, 50, 57, 64 y 119.

Sexto. Pese a interponer la reclamación correspondiente en tiempo oportuno de acuerdo con lo señalado por el Anexo Técnico del Proceso de Selección de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, la Universidad Libre ratificó la determinación del resultado obtenido de **“No continúa en concurso”**.

Séptimo. De la respuesta suministrada, resulta evidente que se trata de un modelo estándar, que solamente transcribe el contenido de la reclamación, más no analiza cada uno de los argumentos esbozados para cada respuesta, con lo cual se encuentra ineficiente e ineficaz el acceso a las pruebas escritas, ya que no hay una respuesta de fondo punto por punto, respuesta por respuesta, o mejor aún, reclamo a cada respuesta que consideran correcta por la CNSC – Universidad Libre.

Octavo. Al no analizarse y emitirse una respuesta de fondo, se vulnera mi derecho fundamental de petición que a todas luces la Corte Constitucional ha reiterado que además de congruente, debe contener una respuesta de fondo, que para el caso particular, no se trata de expresar únicamente porque se definió que cierta respuesta era cierta, sino que determinen de acuerdo a la argumentación expuesta en mi ampliación de la reclamación las razones por las cuales si o por las cuales no es pertinente determinada respuesta.

Noveno. Llego a la conclusión que la respuesta recibida es de un formato o modelo de respuesta estándar debido que a lo largo del documento nunca se manifestaron o se señalaron los argumentos que yo esgrimí en la reclamación. Simplemente, se anexó una tabla en donde estaba la justificación propia de la CNSC y la Universidad Libre de la respuesta que se considera correcta, pero los fundamentos de las mismas, no se apoyan en la Resolución 3842 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, resolución que regula las funciones de los docentes y directivos docentes del país.

Décimo. Las preguntas por las que se pidió la revisión y respectiva argumentación, fueron preguntas donde se preguntaba expresamente por una función puntual que desde la prueba se preguntaba al Directivo Docente Coordinador, y que desde la Resolución 3842 de marzo de 2022, no corresponden al quehacer pedagógico de este directivo en las instituciones educativas.

Décimo primero. En la Guía para la Orientación al Aspirante de las pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos, en la página 34, se afirma que *“Para efectos de procesar las respuestas durante la calificación, se aplicarán procedimientos matemáticos y estadísticos utilizados en pruebas con características similares, como **puntuación directa o puntuación directa ajustada (negrita propia)**”*. En la respuesta a la reclamación que presenté, se me informa que *“(…)para el cálculo de la puntuación se utilizó el **“método de calificación con ajuste proporcional”***.

Allí se explica la fórmula matemática con que se calificó la prueba, en la cual no se tiene en cuenta el número de aciertos que haya tenido cada aspirante en la prueba, sino en una proporción de referencia establecida para cada OPEC, y la cercanía que tenga el puntaje obtenido por parte del aspirante a esta proporción.

Décimo segundo. De acuerdo con el Anexo Técnico 1 de la Licitación LP-002 de 2022, que fue publicada por la CNSC para escoger la entidad encargada de la realización de las pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria; la Universidad Libre (entidad que se adjudicó este contrato), emitiría en el marco del desarrollo del contrato, una guía de orientación al aspirante, que debía desarrollar los siguientes aspectos, respecto de la calificación de las pruebas escritas:

“- • *Procedimiento de análisis de ítems y sistema o metodología de calificación para las pruebas escritas, explicitando que:*

- *La calificación no corresponderá al número de aciertos sino a una calificación ponderada, es decir que en la calificación puede haber eliminación de ítems de acuerdo con el análisis psicométrico, por lo que cabe la posibilidad de que no todos los ítems contestados formen parte de la calificación.*

- *La calificación se hará por número de OPEC.*

- *Los diferentes escenarios de calificación para las pruebas eliminatorias, buscando el escenario de mayor favorabilidad para los aspirantes, pudiendo ser: la escala de centil, baremo normalizado o no normalizado y/o puntuación directa.*

- *Las pruebas psicotécnica pueden ser calificadas con un baremo no normalizado, sólo estandarizado. Por ejemplo, puntuaciones T: escala de cero (0) a cien (100) puntos con media 50 y Dt. 10.*
- *La posibilidad de que se elimine hasta, máximo, el 15% de los ítems antes de la calificación de acuerdo con los resultados del análisis psicométrico.” (Anexo 1. Licitación LP-002 de 2022, página 32).*

Décimo tercero. Por su parte, la guía de orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, tiene solamente un aparte en donde se explica la calificación de las pruebas, en la página 34, en donde expresa:

“¿Cómo se Calificarán las Pruebas?”

La Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos para el contexto Rural, la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas para el Contexto No Rural y la Prueba Psicotécnica para ambos contextos, serán calificadas conforme a los parámetros establecidos en los Acuerdos del Proceso de Selección.

La calificación de estas pruebas se realizará por grupo de referencia y el resultado de cada una se notificará en una escala de cero (0.00) a cien (100.00) puntos con dos cifras decimales truncadas, por ejemplo, si la puntuación con cinco decimales es igual a 98,45989, al truncarla, para que solamente queden dos decimales, la calificación sería 98,45.

*Para efectos de procesar las respuestas durante la calificación, se aplicarán procedimientos matemáticos y estadísticos utilizados en pruebas con características similares, como **puntuación directa o puntuación directa ajustada (negrita propia)**. Los ítems que no cumplan con los parámetros psicométricos no se incluirán en la calificación.*

Además, los resultados obtenidos por los concursantes en cada una de estas pruebas se ponderarán por el respectivo peso porcentual establecido en el Acuerdo de Convocatoria.”

Décimo cuarto. Es posible evidenciar que la Universidad Libre incumplió una de las condiciones técnicas del Anexo 1, por el cual fue adjudicatario de la Licitación LP-002 de 2022, al no incluir dentro de la guía del aspirante los aspectos **mínimos necesarios** para que el aspirante conociera cuál iba a ser el método de calificación de la prueba escrita. En la guía no se incluyó la posibilidad del uso del **método de calificación con ajuste proporcional**, que fue el que se aplicó para la calificación de la prueba.

Décimo quinto. Solamente hasta la respuesta de la reclamación interpuesta por los resultados obtenidos en la prueba escrita, fue que conocí por parte de la CNSC y de la Universidad Libre, información sobre el método de calificación. En esta reclamación, me fue expresado lo siguiente:

“Así mismo, para el proceso de calificación se le informa que el cálculo de la puntuación se hace teniendo en cuenta el desempeño del grupo de referencia (OPEC), que se refleja en los parámetros (proporción de referencia) que se usan. Eso quiere decir que las puntuaciones no dependen de la sumatoria de los aciertos o del valor de cada uno de los ítems que componen la prueba en la calificación.

En relación con la calificación de la prueba eliminatoria, se informa que, para el cálculo de la puntuación se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional. El método está basado

en la proporción de referencia para cada grupo de aspirantes según la OPEC a la que se inscribieron.”

Por esta razón, considero que se ha trasgredido el principio de la legalidad, ya que el operador (Universidad Libre) no se ajustó a los parámetros técnicos exigidos en la licitación, que fueron aceptados bajo la carta de aceptación de las condiciones establecidas en el Anexo No 1, que fue firmada por el señor Jorge Alarcón Niño, representante legal de la Universidad Libre, el día 13 de abril de 2022, en donde se declara lo siguiente:

“En caso de que sea seleccionada la presente propuesta, nos comprometemos de manera irrevocable e incondicional a desarrollar el contrato, con la totalidad de las condiciones y procedimientos técnicos establecidos en el ANEXO No. 1 - ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (negrita propia) (...)”

Igualmente, declaran en esta carta:

“En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir en NO CUMPLIR con los procedimientos y requerimientos establecidos en el ANEXO No. 1 - ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, por cuanto, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información (...).”

Décimo sexto. Es evidente, de acuerdo con lo desarrollado en los anteriores numerales, que la Universidad Libre incumplió con una de las especificaciones técnicas emitidas por la CNSC respecto de la divulgación de la información de manera completa y detallada del sistema de calificación de las pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria. En este sentido, reitero que se han vulnerado los principios de legalidad y de debido proceso, ya que por un lado, se ha omitido información VITAL que debía ser conocida por los aspirantes en la guía de orientación sobre la presentación de pruebas escritas antes de su aplicación, y por otro lado, la reclamación no ha sido un documento que brinde una respuesta de fondo frente a las inquietudes planteadas por mí, ni se ha desplegado un argumento con base en la legislación educativa respecto de las funciones del directivo docente coordinador, que justifiquen que las respuestas dadas como correctas, lo sean a la luz de esta legislación.

Décimo séptimo. Dentro del Decreto 1278 de 2002, decreto que expide el Estatuto de Profesionalización docente, en el artículo 11, se indica que para la provisión de cargos cuando se produzca una vacante de docente o directivo docente, ésta debe surtirse haciendo uso de la lista de elegibles de la respectiva convocatoria que se haya llevado a cabo. También se aclara que esta lista de elegibles tiene una vigencia de dos (2) años a partir de su fecha de expedición.

El método de calificación con ajuste proporcional que fue usado para en este caso, para la calificación de la prueba escrita de conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, redujo considerablemente el número de aspirantes de **85**

personas que presentaron la prueba escrita a **8 personas** que son las que continúan en concurso.

Si bien el número de vacantes ofertadas es 3, y 8 personas sobrepasan en el doble el número de vacantes ofertadas, el restringir de esta manera el número de aspirantes, corta la posibilidad de personas como yo, que obtuvimos un número de aciertos considerable para el número de preguntas de la prueba escrita, no poder hacer parte de una lista de elegibles territorial.

Décimo octavo. Es sabido que, dentro del magisterio colombiano, se presentan novedades en las vacantes como pensión por retiro o enfermedad, apertura de grupos o de sedes que requieren docentes, reubicaciones por especialidad y otras situaciones administrativas que requieren ser cubiertas a la brevedad posible, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo.

En este caso, al reducir de manera sustancial el número de personas que alcanzan el puntaje mínimo establecido, (70 puntos para mi caso), se coarta la posibilidad de hacer parte de una lista de elegibles que tiene dos (2) años de vigencia, y que puede significar una oportunidad de empleo durante este tiempo. Aunque en la convocatoria, solo se oferta 3 vacantes, durante el tiempo de vigencia de la lista, este número puede aumentar y posibilitar que las personas de la lista puedan acceder a otras vacantes.

Con la calificación de la prueba como se dio, se acortan estas posibilidades, y de cierta manera, se privilegian docentes provisionales que acceden a estas vacantes de manera más fácil, que alguien que presentó una prueba escrita y tuvo un desempeño destacado como en mi caso.

Décimo noveno. La exclusión de mi participación del Proceso de Selección referido de manera injustificada vulnera gravemente mis derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso administrativo y al acceso efectivo a cargos públicos puesto que con base a las consideraciones erróneas de la CNSC y /o la Universidad Libre no puedo continuar en el concurso de méritos para acceder al empleo postulado.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Planteamiento del Problema Jurídico.

En la presente acción de tutela se debe determinar si la Universidad Libre y la CNSC vulneran mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos, al no permitirme continuar con el concurso de méritos pese a contar con un número de aciertos destacado dentro de la prueba escrita y existir ciertas inconsistencias en la publicación de la información sobre la calificación de dicha prueba.

Para determinar la vulneración se hará el siguiente análisis de procedibilidad para el caso en concreto.

Procedibilidad de la Acción de Tutela.

La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido para amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este procedimiento tiene un carácter residual o subsidiario, y, por tanto, sólo procede cuando la persona afectada en sus derechos

fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el derecho vulnerado o para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, la acción de tutela es procedente cuando se cumplen alguno de los siguientes escenarios:

1. El afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, con lo cual la acción de tutela actúa como mecanismo único (no subsidiario) y definitivo (transitorio), y además no se requiere la demostración de un perjuicio irremediable.
2. El afectado sí dispone de otro medio de defensa judicial, pero éste no es idóneo o eficaz para proteger el derecho, con lo cual la acción de tutela actúa como mecanismo subsidiario y definitivo. Tampoco se requiere la demostración de un perjuicio irremediable.
3. El afectado dispone de otro medio de defensa judicial, pero se acude a la acción de tutela como mecanismo subsidiario y transitorio para evitar un perjuicio irremediable demostrable.

La presente acción de tutela se enmarca en el primer escenario donde es procedente como **mecanismo único y definitivo** dado que no existe otro mecanismo judicial que pueda proteger mis derechos fundamentales invocados con ocasión de la negativa de la Universidad Libre y la CNSC de permitirme continuar en el proceso de Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, ya que contra los resultados definitivos de la prueba escrita de conocimientos específicos y pedagógicos no procede recurso alguno y dicha negativa de la Universidad Libre (operador contratado para dicho estudio) no se considera un acto administrativo susceptible de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Si se llegará a considerar que la negativa sobre mi continuidad en el concurso es un acto administrativo de la CNSC susceptible de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces la presente acción de tutela se enmarcaría en el segundo escenario donde es procedente como **mecanismo subsidiario y definitivo** dado que una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, aún con medida cautelar, tomaría mayor tiempo que el desarrollo del concurso mismo (ineficaz), generándose una sentencia definitiva mucho después que los ganadores del concurso se hayan posesionado e incluso superado el periodo de prueba, haciendo más difícil y dispendioso el resarcimiento de mis derechos como podría ser la nulidad y devolución de todo lo actuado (inepto).

Finalmente, si se llegará a considerar que la medida cautelar de suspensión provisional en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sí es idónea o eficaz, en todo caso estaríamos en el tercer escenario donde es procedente la acción de tutela como **mecanismo subsidiario y transitorio** para evitar un perjuicio irremediable, cual sería mi salida definitiva del concurso al impedírseme continuar con la etapa de verificación de requisitos mínimos, la cual es programada por la CNSC.

Bajo el entendido que no se busca atacar la legalidad (nulidad) del proceso de selección o de los actos administrativos que se han desplegado para la ejecución del mismo, se concluye que no existen acciones o medios de control, al menos idóneos o eficaces, en la jurisdicción de lo

contencioso administrativo que puedan protegerme ante la desprotección de mis derechos fundamentales del trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos.

Cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no siempre son eficaces, pues generalmente implican someter a los ciudadanos que se presentaron a un sistema de selección que se basa en el mérito a eventualidades, tales como: (i) que la lista de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta o, (ii) se termine el período del cargo para el cual concursaron, cuando éste tiene un periodo fijo determinado en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la efectividad del derecho al acceso a cargos públicos, sino que implicaría una compensación económica, el cual no es el fin de las personas que instauran los procesos.

Por todo lo anterior, las acciones de tutelas que se interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en el marco de ésta, la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Sin embargo, al juez constitucional le corresponde, establecer si esas medidas de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces, atendiendo a las particularidades del caso en concreto puesto en su conocimiento.

Por último, es importante poner de presente que, mediante sentencia T-059 de 2019, la alta corporación constitucional manifestó que: *“pese a que se podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto es que en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y se convierte en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales”*.

Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las sentencias C-645 de 2017, C-588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio fundante del Estado Colombiano y del actual modelo democrático, en la medida en que tiene un triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de éste, al tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución.”

Derecho fundamental al Trabajo.

El derecho al trabajo es entendido como la facultad de todas las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero en condiciones dignidad y justas bajo la protección del Estado.

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia señala el derecho al trabajo en los siguientes términos:

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Sobre su relevancia constitucional, en sentencia C-200 del 2019, la Corte Constitucional aborda este derecho a partir de: *“... tres dimensiones. Primero, es valor fundante del Estado Social de Derecho porque orienta las políticas públicas y las medidas legislativas. En segundo lugar, es un derecho que goza de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que, por una parte, le otorga el carácter de fundamental y, de otra, le concede contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social. Por último, es un principio rector que limita la libertad de configuración normativa del Legislador, pues impone un conjunto de reglas y principios mínimos laborales que deben ser respetados por la ley en todas las circunstancias, de hecho, conforme a lo establecido en la Sentencia C-479 de 1992, configuran el “suelo axiológico” de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre”.*

En el caso en concreto, el derecho fundamental al Trabajo se vulnera al impedírseme continuar en el proceso de selección, cuando se cuenta con un número de aciertos destacado en la prueba escrita de conocimientos específicos y pedagógicos, y cuando no se dieron a conocer de antemano por parte de la Universidad Libre y la CNSC la totalidad de condiciones de la calificación de esta prueba, y cuando se incumplió por parte del operador (Universidad Libre) una de las condiciones de divulgación de la información sobre la calificación de manera clara en la guía de orientación al aspirante. Igualmente, no se ha dado respuesta desde la legislación educativa al porqué de las respuestas que en esta prueba se consideraron correctas, a la luz de las funciones de un directivo docente coordinador, siendo inevitable la consecución y finalización del concurso para acceder con base en el mérito a un puesto de trabajo en periodo de prueba.

Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, esto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-341 de 2014 ha reconocido el derecho fundamental al debido proceso como aquel conjunto de garantías que buscan la protección de las personas en cualquier actuación administrativa o judicial, logrando de esta forma la aplicación material de la justicia, así: *“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, (...)”*

Lo anterior, implica que toda autoridad administrativa, debe garantizar el debido proceso a la persona que pueda llegar a afectar mediante su actuación.

Asimismo, en palabras de la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-331 de 2012 se exponen los siguientes aspectos derivados del debido proceso administrativo: *“(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.*

Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa”

El concurso de méritos es una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional, y la entidad encargada de realizarlo debe someterse a unos parámetros ciertos para poder adelantar las etapas propias del concurso a efectos de concluir con la elaboración de la lista de elegibles, pues se afectan los derechos de quienes participen en las convocatorias.

Frente al debido proceso en materia de concurso de méritos, la Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: *“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido.*

En el caso en concreto, el derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad se vulneran al no contar con las garantías de información oportuna y pertinente sobre el fundamento legal que justifica unas respuestas correctas a la luz de las funciones que cumple un directivo docente coordinador, y al no contar con la información antes de la aplicación de la prueba sobre el método de calificación a aplicar, en la guía de orientación al aspirante, situación que incurre en un incumplimiento de las especificaciones técnicas que el operador (Universidad Libre) debía cumplir al ser el adjudicatario de una licitación con la CNSC.

Derecho de acceso a cargos públicos.

La posibilidad de acceso a un cargo público está determinada constitucionalmente de la siguiente manera:

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.”

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo público consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a concursar, luego de haber acreditado los requisitos previstos en la respectiva convocatoria, y, una vez superadas las etapas del concurso, a evitar que terceros restrinjan dicha opción. Ciertamente, el ámbito de su protección se circunscribe a (i) *la posesión* [hace referencia al acto de posesión en un cargo público] *de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo*, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para posesionar a la persona que ha cumplido con las exigencias previstas por el concurso, (iii) la facultad del concursante de elegir de entre las distintas opciones de cargos públicos disponibles, de ser el caso, aquella que más se ajuste a sus preferencias y (iv) la prohibición de *remover de manera ilegítima* a una persona que ocupa un cargo público.

En el caso en concreto, el derecho de acceso a cargos públicos se vulnera al impedírseme continuar en el concurso, por no aprobar con el puntaje mínimo establecido, y contar con los vicios de procedimiento ya descritos en los hechos que sustentan esta tutela.

III. PETICIONES

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a este despacho:

PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso administrativo, derecho de petición y al acceso a cargos públicos.

SEGUNDO. ORDENAR a la CNSC y/o a la Universidad Libre a que en el término de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, corrija mi resultado den la prueba escrita de conocimientos específicos y pedagógicos, cambiándola de 69.15 a una calificación **mayor** de 70.00, en el marco de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 y en consecuencia me permita seguir en las siguientes etapas de la

convocatoria, en razón a que la CNSC y la Universidad Libre omitieron información vital para la presentación de la prueba escrita antes de su aplicación, y no dan respuesta de fondo a la reclamación que se surtió dentro del proceso.

TERCERO. ORDENAR a la CNSC y/o a la Universidad Libre a que en el término de las (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, responda a cada uno de los argumentos planteados dentro de la reclamación presentada ante el Sistema SIMO el 8 de noviembre de 2022, y que justifiquen a la luz de la Resolución 3282 de marzo de 2022, por qué las opciones de respuestas de las preguntas citadas que ellos consideran correctas, corresponden a funciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para el directivo docente COORDINADOR.

TERCERO. En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se continúe con lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

IV. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto no haber presentado petición similar por los mismos hechos y derechos ante alguna autoridad judicial.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

En orden a establecer la violación de los derechos fundamentales vulnerados cuya protección se invoca, solicito respetuosamente se sirva practicar y tener como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES DE PARTE:

- Copia de Cedula de ciudadanía del suscrito.
- Constancia de Inscripción a la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022.
- Resultados de la prueba de conocimientos pedagógicos y específicos.
- Reclamación presentada ante la CNSC.
- Respuesta a la Reclamación presentada.
- Guía de orientación para el aspirante, pruebas escritas, Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022
- Anexo 1 Licitación LP-022 de 2022
- Carta de aceptación del Anexo 1 Licitación LP-022 de 2022 por parte de la Universidad Libre.

OFICIO:

Las que considere pertinentes usted Señor(a) Juez Constitucional para establecer con claridad los hechos.

VI. COMPETENCIA

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela por tener jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 de reparto de la acción de tutela del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho que indica que: *“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.”*

VII. NOTIFICACIONES

La demandada Comisión Nacional del Servicio Civil en la carrera 12 No 97-80, piso 5, de Bogotá, D.C.; teléfono PBX: 57 (1) 3259700; correo electrónico: notificacionesjudiciales@cns.gov.co

La Universidad Libre recibirá notificaciones al correo diego.fernandez@unilibre.edu.co y juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co

Por mi parte, recibiré las notificaciones en el correo electrónico: [REDACTED]

Del señor(a) Juez, respetuosamente:

[REDACTED]

Allison Samantha Blanco Llanos

C.C No [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]